



Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO MIXTO DE BARRANQUILLA

IMPUGNACIÓN TUTELA

RADICACIÓN No.: 08-001-41-89-022-2023-00233-01

ACCIONANTE: EDUARDO DAVID MARTÍNEZ GALVIS CC 1047498311

ACCIONADO: NATURA COSMÉTICOS LTDA.

DERECHO: HABEAS DATA

Barranquilla, ocho (08) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

I. ASUNTO A TRATAR

Procede el despacho a decidir acerca de la impugnación a que fue sometido el fallo de tutela de fecha veintisiete (27) de marzo de 2023, proferido por EL JUZGADO VEINTIDÓS DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE BARRANQUILLA, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor EDUARDO DAVID MARTÍNEZ GALVIS CC 1047498311, quien actúa en nombre propio, en contra de la entidad NATURA COSMÉTICOS LTDA., por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales petición, habeas data, buen nombre y debido proceso; y en donde se negó el amparo solicitado

II. ANTECEDENTES

En el escrito de la tutela, la parte accionante, narra los siguientes hechos que se sintetizan así:

1. El día 23 de febrero del 2023, presentó ante NATURA COLOMBIA petición, cuya solicitud se resume en: " Solicito el retiro inmediato del reporte negativo en centrales de riesgo Datacrédito y Transunion (Cifin) y se corrija la calificación de riesgo (entendido como cualquier vector que pueda afectar mi historial crediticio), por cuanto se incumplió lo dispuesto establecido por la ley 1266 de 2008, en su artículo 12, y el párrafo del artículo 6 de la ley 2157 del 29 de octubre de 2021 y la Sentencia C-282 del 2021 con respecto a la notificación previa antes de proceder con el reporte negativo.
2. Igualmente, El día 10 de marzo de 2023 recibí una respuesta por parte de la entidad NATURA COLOMBIA, pero dicha respuesta no satisfizo la solicitud, por el contrario no fue oportuna, congruente, eficaz y no envió soportes donde se evidencie la notificación del reporte negativo recibida o firmada por mi persona o correo certificado como establece las normas y decretos establecidos, no obra prueba alguna que evidencie que alguno de estos canales digitales sea el dispuesto por mí para recibir notificaciones. En suma, de ello, lo aportado tampoco demuestra la remisión de un correo electrónico, ya que, la imagen insertada es un reporte consignado en una base de datos perteneciente a la fuente de la información de la cual no se observa mediante qué sistema, operador de correo electrónico o desde qué servidor el emisor envió el mensaje de datos al actor; de igual manera no dio solución a fondo a lo solicitado en mi derecho de petición.
3. Necesito acceder a productos financieros como el derecho a una vivienda propia y no es posible porque el reporte persiste.

### III. PRETENSIONES

Basándose en los fundamentos fácticos expuestos, el accionante pretende que se le amparen sus derechos depuestos y consecuentemente: *“...que se tutele sus derechos fundamentales de petición y habeas data, buen nombre y debido proceso, de igual manera, se ordene a la accionada en el término de 48 horas contadas desde la notificación de la sentencia, proceda a la eliminación de los datos negativos que figuran en centrales de riesgo por parte de la accionada...”*

### IV. TRÁMITE PROCESAL

La presente acción de tutela se avocó el catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés (2023), por EL JUZGADO VEINTIDÓS DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BARRANQUILLA, ordenó la notificación de la accionada, y la vinculación de DATA CREDITO EXPERIAN COLOMBIA, TRANSUNION-CIFIN, a fin de que se pronunciaran sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela.

NATURA COSMÉTICOS LTDA, a través de MARY NUBIA HOYOS LOPEZ, en su calidad de Representante Legal Suplente indicó que *“...el accionante, se vinculó como Consultora Natura, en la que se autoriza expresa e irrevocablemente a Natura a reportar a las centrales o los operados de la de riesgo la información sobre el cumplimiento o incumplimiento, si los hubiere, de sus obligaciones crediticias y patrimoniales. Con fundamento en dicha relación comercial Natura Cosméticos Ltda., entregó las siguientes órdenes: a. Obligación No. 8727010, contenida en la Factura No. 6044176, del día 16 de junio de 2018, la cual venció el día 09 de julio de 2018. Cabe mencionar que el valor inicial de la factura fue de \$207.551, que la obligación no presenta pago y que la fecha hay más de 1.686 días de mora. b. Obligación No. 8809216, contenida en la Factura No. 6104352, del día 05 de julio de 2018, la cual venció el día 26 de julio de 2018. Cabe mencionar que el valor inicial de la factura fue de \$251.581, que la obligación no presenta pago y que la fecha hay más de 1.669 días de mora. NATURA COSMÉTICOS LTDA., con fundamento en lo señalado en la Ley 1266 de 2008, mediante comunicación escrita se envió el día 17 de agosto de 2018 a la parte accionante “Notificación de Reporte a Centrales de Riesgo” Indican que dicha comunicación fue recibida en la misma dirección que se registra dentro del contrato de incorporación, como se evidencia en la guía de envío por correo certificado, la cual es la misma que se indica en el contrato suscrito por la accionante. 5. De ahí entonces que se haya realizado el reporte a las centrales de riesgo Datacrédito y Cifin el día 06 de septiembre de 2018, dicha información fue notificada a la parte accionante el día 17 de marzo de 2023, en respuesta al derecho de petición, a través del correo electrónico aportado...”*

CIFIN S.A.S. (TransUnion®), a través de JAQUELINE BARRERA GARCÍA, en su calidad de apoderado general en su informe indicó: *“...en cuanto a la consulta al historial de crédito de EDUARDO DAVID MARTÍNEZ GALVIS identificado con la cédula de ciudadanía 1.047.498.311, revisado el día 16 de marzo de 2023 a las 11:30:07 frente a la Fuente de información NATURA COSMÉTICOS LTDA., NO se evidencian datos negativos, esto es, información de obligaciones que se encuentren actualmente en mora o que habiendo estado en mora en el pasado, los datos negativos se sigan visualizando por estar cumpliendo el término de permanencia de Ley, En este caso el accionante no tiene reportes negativos ante CIFIN S.A.S. (Transunion®) y por ello solicitan ser desvinculados del trámite tutelar ya que carece de legitimación....”*

EXPERIAN COLOMBIA S.A - DATA CREDITO., a través de ANGIE KATHALINA CARPETTA MEJIA, en su calidad apoderado judicial indico en su informe que *“...La obligación identificada con el No. 000872701 adquirida por la parte tutelante con NATURA COSMÉTICOS se encuentra cerrada, inactiva, reportada como pago voluntario y contabilizándose el término de permanencia del reporte histórico de mora. En este sentido, según la información reportada por esta fuente de la*

información, la parte actora incurrió en mora durante 43 meses y canceló la obligación en enero de 2023; con ello se tiene que la caducidad del reporte histórico de mora se presentará en enero de 2027. Conforme lo previsto en el artículo 13 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008. Y con referencia a la obligación No. 008809216 adquirida por la parte tutelante con NATURA COSMÉTICOS se encuentra cerrada, inactiva, reportada como pago voluntario y contabilizándose el término de permanencia del reporte histórico de mora. La parte actora incurrió en mora durante 12 meses y canceló la obligación en enero de 2023; con ello se tiene que la caducidad del reporte histórico de mora se presentará en enero de 2025. Conforme lo previsto en el artículo 13 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.

INFORMACION BASICA		6Q222EB
C.C #01047498311 ( ) MARTINEZ GALVIS EDUARDO DAVID		DATA CREDITO
VIGENTE	EDAD 22-28 EXP.15/11/05 EN CARTAGENA	[ BOLIVAR ] 21-MAR-2023

Respecto a la obligación No. 1:

```
+PAGO VOL MX-180 LAB NATURA          202301 000872701 201806 201807 PRINCIPAL
COSMETICOS                               ULT 24 -->[666666666666][666666666666]
25 a 47-->[666666666666][6666654----]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: IND CLAU-PER:000 SECTOR ALMENDRO
```

Respecto a la obligación No. 2:

```
+PAGO VOL MX-180 LAB NATURA          202301 008809216 201807 201807 PRINCIPAL
COSMETICOS                               ULT 24 -->[6666666666654][-----]
25 a 47-->[-----][-----]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: IND CLAU-PER:000 SECTOR ALMENDRO
```

Frente al derecho de petición, señalan que no tiene conocimiento del motivo por el cual NATURA COSMÉTICOS, no ha brindado una respuesta de fondo a la petición aludida por la parte accionante. Los operadores de la información son ajenos al trámite de las peticiones que se radican directamente ante las fuentes de información de conformidad con lo preceptuado por el artículo 16 de la Ley 1266 de 2008, y no interviene en las respuestas que éstas les dan a sus clientes (titulares de la información), pues no conoce los pormenores de la relación comercial que hay o que hubo entre dicha entidad y la parte accionante...”

Posterior a ello, el veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023), se profirió fallo de tutela, que negó los derechos conculcados, por lo que fue impugnada y por reparto correspondió su conocimiento a esta agencia judicial.

## V. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo proferido el día, veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023), EL JUZGADO VEINTIDÓS DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BARRANQUILLA, se decidió negar el amparo solicitado, en ocasión a que: “...De otro lado, observa este despacho que al analizar las pruebas obrantes en el plenario no se advierte vulneración alguna al derecho fundamental al Habeas data, puesto que, en centrales de riesgo, se presentan las obligaciones canceladas y cumpliendo término de permanencia por lo que la acción constitucional se torna improcedente, ya que el accionante cuenta con otros medios de defensa para la protección de sus derechos. Por tanto, no puede el accionante trasladar al juez de tutela algo que no hace parte de su competencia; toda vez que la norma que regula la administración de los datos personales, establece de manera clara su funcionamiento y que le corresponde al titular de la información ejercer las actuaciones legales para conseguir la modificación, actualización, o como en el caso eliminación de los datos que considere ilegales o no ajustados a la realidad, a través de la jurisdicción ordinaria o a través de reclamaciones a la Superintendencia de Industria y Comercio o a la Superintendencia Financiera –según la naturaleza de la entidad vigilada–, para que se ordene la corrección, actualización o retiro de datos personales, o para que se inicie una investigación administrativa por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008 (artículo 17); y, (mi), lo cual le resta competencia al juez constitucional para decidir el caso que nos ocupa En consecuencia el camino que le atañe al actor para desvirtuar lo afirmado por la

*accionada en referencia a las obligaciones que lo mantienen reportado, o en todo caso cumpliendo un término de permanencia, no es a través del medio de amparo constitucional de la tutela, sino mediante el uso de las acciones antes descritas, es allí donde corresponde demostrar una presunta ilegalidad en la notificación y no en este medio donde por la naturaleza y esencia del mismo es incompatible atender asuntos donde se requiera un riguroso debate probatorio y estudio profundo del asunto similar a como procedería en un proceso ordinario. Así las cosas, el accionante tiene otra vía para obtener la protección a los derechos que dice le han sido conculcados, de igual forma, no se demuestra el perjuicio irremediable para intentar la acción como mecanismo transitorio, por lo cual es improcedente. Con arreglo a todo lo que viene de verse, lo que se impone es negar por improcedente el amparo a los derechos fundamentales al habeas data y buen nombre y debido proceso, solicitado por EDUARDO DAVID MARTÍNEZ GALVIS, contra NATURA COSMÉTICOS LTDA., de conformidad con las razones expuestas en este proveído...”*

## VI. IMPUGNACIÓN

La accionante impugnó el fallo referido indicando que “...El fallo de primera instancia se funda en consideraciones inexactas, contrarias a las expuestas dentro de la acción de Tutela. Se niega a cumplir el mandato legal de garantizar el agravio el pleno goce de mis derechos fundamentales como lo dice la LEY. Le recuerdo al señor Juez que ya está aprobada la Ley de borrón y cuenta nueva, debió darme favorabilidad, porque de igual manera la empresa NATURA COSMÉTICOS LTDA debe eliminar mi reporte negativo por estar PAZ Y SALVO. Debo presumir con contrariedad que el señor juez no examinó mis argumentos acerca de la conducta del accionado...”

## VII. PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo con los antecedentes resumidos anteriormente, corresponde a esta agencia judicial determinar:

¿Es procedente la acción de tutela contra la entidad accionada NATURA COSMÉTICOS LTDA, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales petición, habeas data, buen nombre y debido proceso, del señor EDUARDO DAVID MARTÍNEZ GALVIS, al no resolver de fondo la petición elevada y ante la solicitud de eliminación del dato negativo ante las centrales de riesgo?

¿Se encuentran reunidos los presupuestos jurídicos- facticos para revocar la sentencia proferida por el a-quo?

## VIII. COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por ser superior funcional del a-quo, este juzgado resulta competente para conocer de la impugnación al fallo de tutela en referencia.

## IX. NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

El marco constitucional está conformado por los artículos 15, 23, 86 de la Carta Política y 6º del Decreto 2591 de 1991, Ley 1266 de 2008, Ley 1755 de 2015; sentencias T-1319 de 2005, T-094 de 1995, T-067 de 2007, T-847 de 2010, T-487 de 2017, T-077 de 2018, C-418 de 2017, entre otras.

## X. CONSIDERACIONES

La acción de tutela es un mecanismo concebido por la Constitución de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de todas las personas, cuando estos resultaren

amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, con las características previstas en el inciso final del artículo 86 de la Constitución Política la cual constituye una garantía y un mecanismo constitucional de protección, directa, inmediata y efectiva, de los derechos fundamentales.

Para la procedencia de este mecanismo tutelar, es necesario que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer sus derechos, salvo que se ejerza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La acción de tutela procede a título subsidiario cuando la protección judicial del derecho fundamental no puede plantearse, de manera idónea y eficaz, a través, de un medio judicial ordinario y, en este sentido los medios judiciales ordinarios tienen preferencia sobre la acción de tutela. No obstante, la acción de tutela procede como mecanismo transitorio, así exista un medio judicial ordinario, cuando ello sea necesario para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios, será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia atendiendo las circunstancias en que se encuentra la solicitante.

#### LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL BUEN NOMBRE Y AL HABEAS DATA.

El artículo 15 de la Constitución Política establece que *“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas...”*. Este precepto constitucional, consagra tres derechos fundamentales autónomos, a saber, intimidad, buen nombre y habeas data.

Ahora, si bien dichas garantías guardan una estrecha relación, tienen sus propias particularidades que las individualizan, por lo cual, el análisis de su vulneración debe de forma independiente, pues el quebrantamiento de alguna de ellas no conlleva siempre al desconocimiento de la otra. En este respecto, la jurisprudencia constitucional en sentencia T-1319 de 2005, ha establecido las siguientes diferencias:

*“(...) en lo relativo al manejo de la información, la protección del derecho al buen nombre se circunscribe a que dicha información sea cierta y veraz, esto es, que los datos contenidos en ella no sean falsos ni erróneos. Por su parte, la garantía del derecho a la intimidad hace referencia a que la información no toque aspectos que pertenecen al ámbito de privacidad mínimo que tiene la persona y que sólo a ella interesa. Finalmente, el derecho al habeas data salvaguarda lo relacionado con el conocimiento, actualización y rectificación de la información contenida en los mencionados bancos de datos.”*

El buen nombre es uno de los bienes jurídicos más importantes que integran el patrimonio moral de una persona. En este orden de ideas, el ámbito de protección de este derecho, en materia de manejo de la información crediticia y financiera, está circunscrito a la veracidad y certeza de la misma, pues la transmisión de información errónea en este campo no solo afecta la buena imagen o fama que un individuo ha construido en sociedad, sino que también genera un impacto negativo en la esfera económica. Al respecto, la Corte Constitucional ha referido en sentencia T-094 de 1995 que:

*“Es claro que, si la información respectiva es falsa o errónea, no solamente se afectan los derechos a la honra y al buen nombre de la persona concernida, sino que, precisamente por el efecto multiplicador*

*que tiene el informe negativo en las instituciones receptoras de la información incorporada al banco de datos o archivo, resulta notoriamente perjudicada en su actividad económica y en su situación patrimonial. No se pierda de vista que un cierre del crédito puede provocar una cadena de incumplimientos forzados, la incapacidad de contraer nuevas obligaciones, la cesación de pagos y la quiebra”*

De otro lado, el derecho al habeas data o a la autodeterminación informática es aquella garantía constitucional que le permite a la persona “conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas...”.

La jurisprudencia constitucional en sentencia T-067 de 2007, ha fijado las siguientes reglas para verificar su afectación:

*“(...) el derecho al habeas data resulta vulnerado en los eventos en que la información contenida en un archivo de datos (i) sea recogida de forma ilegal, (ii) sea errónea, (iii) o verse sobre aspectos reservados de la esfera personal del individuo”*

En conclusión, el derecho al habeas data o autodeterminación informática, puede ser transgredido, entre otros eventos, en el caso en que la información contenida en una base de datos sea recogida de forma ilegal o contenga datos erróneos. En este último evento no sólo estaría comprometido el derecho a la autodeterminación informática sino también el derecho al buen nombre.

#### HABEAS DATA FINANCIERO

El núcleo esencial del derecho al habeas data consiste en el ejercicio efectivo por parte del titular de la información para conocer, actualizar y rectificar todos los datos que sobre éste figuren en cualquier base de datos o archivos. Específicamente, la garantía al habeas data financiero es definida como “(...) el derecho que tiene todo individuo a conocer, actualizar y rectificar su información personal comercial, crediticia y financiera, contenida en centrales de información públicas o privadas, que tienen como función recopilar, tratar y circular esos datos con el fin de determinar el nivel de riesgo financiero de su titular. Debe advertirse que ésta es una clasificación teórica que no configura un derecho fundamental distinto, sino que simplemente es una modalidad de ejercicio del derecho fundamental, este sí autónomo y diferenciable, al hábeas data”.

En resumen, el habeas data financiero no constituye un derecho fundamental autónomo de la garantía superior a la autodeterminación informática, sino más bien corresponde a una clasificación teórica de ésta. Su contenido está referido a la posibilidad que tienen las personas de (i) conocer, actualizar y rectificar la información acerca del comportamiento financiero y crediticio que figure en los bancos de datos, (ii) de carácter público o privado, (iii) cuya función es administrar dichos datos para medir el nivel de riesgo financiero del titular de la información.

Ahora, en cuanto al objeto de protección del derecho al habeas data financiero, en la sentencia T-847 del 28 de octubre de 2010 se expuso que éste recaía sobre la información semiprivada, entendida como:

*“(...) aquel dato personal o impersonal que, al no pertenecer a la categoría de información pública, sí requiere de algún grado de limitación para su acceso, incorporación en base de datos y divulgación. A esa información solo puede accederse por orden judicial o administrativa y para los fines propios de sus funciones, o a través del cumplimiento de los principios de la administración de datos personales. Ejemplo de estos datos son la información relacionada con el comportamiento financiero, comercial y crediticio de las personas (...)”.*

Es decir, debe tenerse presente que la administración de los datos recae sobre aquella información considerada como semiprivada. En otras palabras, sobre aquella información que tiene relevancia pública en la medida en que dichos datos le permiten a las entidades financieras y a las personas que desarrollan una actividad mercantil, conocer el grado de cumplimiento crediticio y financiero de sus potenciales clientes. Lo anterior encuentra consonancia con los postulados constitucionales referidos a la estabilidad financiera, la confianza en el sistema de crédito y la protección del ahorro público administrado por las entidades bancarias y de crédito.

Por otra parte, el artículo 3° de la Ley 1266 de 2008 fijó algunas definiciones que contemplan, entre otras, a las partes, personas naturales o jurídicas, involucradas en el proceso de divulgación de la información crediticia o financiera, dentro de las que se encuentran el titular de la información, la fuente de información, el operador de la información, y el usuario.

Es importante resaltar que la fuente de información puede suministrar el dato personal, siempre y cuando cuente con autorización previa legal o del titular, al operador de la información y deberá responder por la calidad de los datos que entrega.

Por su parte, el operador de la información está en la obligación de verificar que el dato personal que le envía la fuente es veraz y unívoco. Además, teniendo en cuenta que el operador es quien administra la base de datos tienen la responsabilidad junto a la fuente de garantizar que la información sea completa, es decir, está prohibido el suministro de información incompleta, parcial o fraccionada.

Por último, existen dos requisitos que deben observarse para que proceda el reporte negativo, éstos son: la veracidad y la certeza de la información; y la necesidad de autorización expresa para el reporte del dato financiero negativo.

Lo anterior se traduce en que la fuente debe acreditar la existencia de la obligación con base en los respectivos soportes pues sí no se demuestran o no se tienen los soportes, la obligación se concluye como inexistente o, en el mejor de los casos, se tornaría como una obligación natural ante la imposibilidad de obtener el recaudo forzoso.

En desarrollo del segundo requisito, debe existir autorización expresa, previa, clara, escrita, concreta y libremente otorgada por el titular del dato, esto con el fin de permitirle ejercer efectivamente su garantía al habeas data, la cual se traduce en la posibilidad de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recopilado sobre él en las centrales de riesgo. De lo contrario, se vulneraría su derecho a la autodeterminación informática porque no tendría control sobre la información personal, financiera y crediticia que circularía respecto de él en las bases de datos públicas y privadas.

A esto, debemos tener en cuenta la vigencia de la ley 2157 de 2021 por medio de la cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008, y se dictan disposiciones generales del habeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones conocida como la ley de borrón y cuenta nueva donde el titular de información podrá, entre otras, aplicar reglas para eliminar los reportes negativos a centrales de información, y aplicarán dependiendo de la situación concreta de cada caso.

## EL DERECHO DE PETICIÓN

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. En desarrollo del texto superior, la Ley 1755 de 2015, reguló todo lo concerniente al derecho fundamental de petición, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

La normatividad anterior consagra dos premisas:

- 1- *Presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular, y*
- 2- *Obtener pronta resolución de sus peticiones.*

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional, tales como en sentencias T-487 de 2017 y T-077-18 se ha referido al derecho de petición, precisando que el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas.

En sentencia C-418 de 2017, este Tribunal reiteró que el ejercicio del derecho de petición se rige por las siguientes reglas y elementos de aplicación:

- “1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.*
- 2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.*
- 3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario.*
- 4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.*
- 5) El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, a los particulares.*

6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiere darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.

7) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.

8) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder.

9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado”.

## CASO OBJETO DE ESTUDIO

Descendiendo al caso *sub examine*, se tiene que el señor EDUARDO DAVID MARTÍNEZ GALVIS, quien actúa en nombre propio, hace uso del presente trámite constitucional de la referencia, en contra de la entidad NATURA COSMÉTICOS LTDA, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales petición, habeas data, buen nombre y debido proceso.

Lo anterior, en ocasión a que indica que, el día 23 de febrero del 2023, presentó petición ante la entidad accionada NATURA COSMÉTICOS LTDA, solicitó información sobre la obligación reportada ante centrales de riesgo solicitando actualizar y eliminar reporte negativo ante Datacrédito y Cifin por violar la ley 1266 de 2008 art 12 y le dieron respuesta el día 10 de marzo de 2023, de manera desfavorable a la eliminación del reporte negativo.

Sea lo primero a indicar, que el actor presenta en este trámite dos pretensiones, la primera de ellas, tendiente a amparar su derecho fundamental de petición, en la que afirma haber solicitado a la entidad accionada copia de una serie de documentos tales como la autorización por parte de este para el tratamiento de sus datos y copia de la notificación previa al reporte negativo, fecha de los reportes efectuados por las fuentes y de igual manera la eliminación del reporte negativo, sin que la entidad le haya brindado una respuesta de fondo, y la segunda pretensión y de manera subsidiaria que este despacho judicial, ordene la eliminación del reporte negativo ante las centrales de riesgo.

Sin embargo, el actor en los hechos narrados en la tutela y en el escrito de impugnación, manifiesta su inconformidad frente a la respuesta brindada por la accionada, en relación al trámite de la notificación previa al reporte negativo en las centrales de riesgo.

Ahora bien, revisada la contestación de la entidad accionada, se evidencia que la misma, fue otorgada de forma completa, conforme a que se respondieron a plenitud todas las pretensiones del peticionario y, a su vez, se adjuntó prueba del envío de los documentos que se alegaron como anexos en la respuesta otorgada, respuesta que fue remitida al correo electrónico que el actor proporciono, medios indicados para ello, pero se negó a la eliminación del reporte.

Razón por la cual, y frente al derecho de petición, no se observa una vulneración, teniendo en cuenta que no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. Esto quiere decir que la resolución a la petición, producida y comunicada dentro de los términos que la ley señala, representa la satisfacción del derecho de petición, de tal manera que, si la autoridad ha dejado transcurrir los términos contemplados en la ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso concluir que vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la falta de respuesta, quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato constitucional.

Ahora bien, si el actor no se encuentra conforme con la respuesta brindada por la entidad la Ley 1266 de 2008, le brinda la potestad al titular de la información que no se encuentre satisfecho, a recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida, lo anterior, teniendo en cuenta que la tutela está caracterizada por ser esencialmente subsidiaria, es decir, su procedencia está sujeta a la verificación previa de la no existencia de otros medios de defensa o a que ante su existencia, éstos no sean lo suficientemente eficaces para la protección inmediata de los derechos fundamentales de los asociados, y en el caso de marras no se evidenció una vulneración de sus derechos en cuanto al tratamiento de sus datos.

En este punto, es menester indicar que la Ley 1266 de 2008, le brinda la potestad al titular de la información que no se encuentre satisfecho, a recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida, en este orden, el numeral 6° del literal II del artículo 16 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, preceptúa: *“Sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental del hábeas data, en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida. La demanda deberá ser interpuesta contra la fuente de la información la cual, una vez notificada de la misma, procederá a informar al operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, de forma que se pueda dar cumplimiento a la obligación de incluir la leyenda que diga "información en discusión judicial" y la naturaleza de la misma dentro del registro individual, lo cual deberá hacer el operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a haber recibido la información de la fuente y por todo el tiempo que tome obtener un fallo en firme. Igual procedimiento deberá seguirse en caso que la fuente inicie un proceso judicial contra el titular de la información, referente a la obligación reportada como incumplida, y este proponga excepciones de mérito.”*

De lo anteriormente expuesto, se colige que el accionante no ha agotado todas las alternativas establecidas en la ley 1266 de 2008, en este caso presentar la respectiva reclamación o queja ante la Superintendencia Financiera, para que se ordene la corrección, actualización o retiro de datos personales, o si llegado el caso se inicie la actuación administrativa por el incumplimiento de obligaciones como fuentes de información; lo anterior, teniendo en cuenta que la tutela está caracterizada por ser esencialmente subsidiaria, es decir, su procedencia está sujeta a la verificación previa de la no existencia de otros medios de defensa o a que ante su existencia, éstos no sean lo suficientemente eficaces para la protección inmediata de los derechos fundamentales de los asociados.

Ahora bien, la Corte Constitucional también ha establecido como excepción al principio de subsidiariedad cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta diversos factores y cada caso en concreto según se manifestó en líneas

anteriores, sin embargo, en el presente caso no se evidencia que se esté enfrente de este, pues el actor, no se encuentra en estado de vulnerabilidad, ni debilidad manifiesta, ni acredita ser un sujeto de especial protección constitucional, ni se encuentra demostrado que las vías ordinarias establecidas no sean idóneas ni eficaces para este caso en concreto.

Así las cosas, se confirmará la decisión impugnada, por cuanto el accionante no ha agotado todas las alternativas que dispone en la justicia ordinaria y a la fecha de presentación de la acción de tutela (14 de marzo de 2023) no ha cumplido el plazo máximo de permanencia, a partir de la fecha de pago, enero de 2023.

#### XI. RESUMEN O CONCLUSIÓN

Habida cuenta de los hechos y argumentaciones esbozadas anteriormente, procederá el juzgado ha confirmar el proveído impugnado, al no encontrarse vulneración alguna frente a la petición y habeas data al encontrarse, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del trámite constitucional.

Por lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Mixto de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

#### RESUELVE

1. CONFIRMAR el fallo de tutela de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023), proferido por EL JUZGADO VEINTIDÓS DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BARRANQUILLA, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor EDUARDO DAVID MARTÍNEZ GALVIS CC 1047498311, contra NATURA COSMÉTICOS LTDA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído
2. NOTIFÍQUESE esta providencia por el medio más expedito, es decir, por medio del correo electrónico ccto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co.
3. Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



LINETH MARGARITA CORZO COBA  
JUEZA